



Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3  
Registro Interno N° /2023

**LEGAJO DE APELACIÓN DE G., S. I.Y G., B. A.EN AUTOS:  
“G., S. I.Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN ARTÍCULO 303  
C.P.”.**

CPE 101/2017/7/CA3. Orden N° 33.927. Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, Secretaría N° 5. Sala “A”.

Buenos Aires, de septiembre de 2023.

**VISTO:**

El recurso de apelación interpuesto por la defensa de S. I.G., de B. A.G. y en representación de C. P.S.A. contra la resolución por la cual se dictó el auto de procesamiento de aquéllos, sin prisión preventiva en los casos de los aludidos en primer y segundo término, se ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los imputados y mantener la prohibición de salida del país dispuesta respecto de los nombrados G..

El memorial por el cual el letrado defensor de S. I.G., de B. A.G. y que actúa en representación de C. P.S.A. informó en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

**Y CONSIDERANDO:**

1º) Que, por la resolución recurrida, se dictó el auto de procesamiento de Isaac G., de B. A.G. y de C. P.S.A. por considerárselos penalmente responsables del delito previsto por el art. 303, inc. 1º, del Código Penal en función de la “...*presunta puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de un ilícito penal a partir del segundo semestre del año 2011, que se habría llevado a cabo mediante diversos aportes irrevocables de capital en C. P.S.A. (que desarrolla la actividad de casa de cambio) efectuados por parte*



de S. I.G. y B. A.G. (accionistas y representantes legales de aquella), cuya procedencia en principio no se encontraría justificada, así como tampoco la capacidad económica de los nombrados para hacer aquellos aportes; a partir de que se habría constatado de manera indiciaria la posible comisión de hechos ilícitos precedentes, relacionados con operaciones de cambio de divisas marginales efectuadas por la casa de cambio (en infracción al régimen penal cambiario), por lo menos desde el año 2009...” (confr. puntos dispositivos I, III y V en registro que obra en el sistema de Gestión Judicial Lex 100).

Asimismo, conforme surge de aquel pronunciamiento, “...la fiscalía acusadora efectuó, mediante un cuadro, un detalle de los montos y fechas de los diversos aportes llevados a cabo por Brian y S. G. a C. P.S.A., el cual refleja lo siguiente...”:

Capital al 11/07/11 - \$ 2.903.000	Aportes
	28/07/11 - \$ 30.000
	30/08/11 - \$ 15.000
	28/12/11- \$ 60.000
Total de aportes - \$ 105.000 (S. I.G. – 85,5% de participación societaria - \$ 89.775 – B. A.G. – 14,5% de participación societaria - \$ 15.225).	

Capital al 18/01/12 - \$ 3.008.000	Aportes
	30/01/12 - \$ 20.000
	29/02/12 - \$ 30.000
	30/03/12 - \$ 50.000
Total de aportes - \$ 100.000 (S. I.G. – 85,5% de participación societaria - \$ 85.500 – B. A.G. – 14,5% de participación societaria - \$ 14.500).	

Capital al 18/07/12 - \$ 3.108.000	Aportes
	26/04/12 - \$ 150.000
	28/05/12 - \$ 150.000
	28/06/12 - \$ 370.000
Total de aportes - \$ 670.000 (S. I.G. – 85,5% de participación societaria - \$ 572.850 – B. A.G. – 14,5% de participación societaria - \$ 97.150.	





Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

Capital al 19/10/12 - \$ 3.778.000	Aportes
	30/05/13 - \$ 75.000
	28/06/13 - \$ 60.000
Total de aportes - \$ 135.000 (S. I.G. – 85% de participación societaria - \$ 115.425 – B. A.G. – 14,5% de participación societaria - \$ 19.575).	

Capital al 14/10/13 - \$ 3.913.000	Aportes
	19/10/13 - \$ 90.000
Total de aportes - \$ 90.000 (S. I.G. – 85% de participación societaria - \$ 76.950 – B. A.G. – 14,5% de participación societaria - \$ 13.050).	

Capital al 14/03/14 - \$ 4.003.000	Aportes
	29/08/14 - \$ 120.000
Total de aportes - \$ 120.000 (S. I.G. – 85% de participación societaria - \$ 102.600 – B. A.G. – 14,5% de participación societaria - \$ 17.400).	

Capital al 27/02/15 - \$ 4.123.000	Aportes
	31/10/14 - \$ 130.000
Total de aportes - \$ 130.000 (S. I.G. – 85% de participación societaria - \$ 111.150 – B. A.G. – 14,5% de participación societaria - \$ 18.850).	

Capital al 28/04/15 - \$ 4.253.000	Aportes
	30/12/14 - \$ 110.000
Total de aportes - \$ 110.000 (S. I.G. – 85% de participación societaria - \$ 94.050 – B. A.G. – 14,5% de participación societaria - \$ 15.950).	

Asimismo por el decisorio mencionado se aclaró que “... el monto referido por la denuncia...(\$2.988.000) se corresponde a los aportes de capital efectuados por B. A.G. y S. I.G., en favor de C. P.S.A., contabilizados desde el año 2009 y hasta el año 2015...y aquel monto no es coincidente con el monto total de los aportes de capital reflejados por el cuadro...” precedente “...(\$1.460.000) toda vez que...” aquél “...solo incluye...aportes (que son una parte de los destacados por aquella denuncia y por las actas aportadas por la I.G.J.) efectuados a partir del segundo semestre del año 2011 y hasta fines del año 2014 (específicamente 28/07/11 a 30/12/14,

respectivamente). La imputación se limitó al contenido del cuadro mencionado (a pesar de la mayor amplitud de la denuncia), pues aquel cuadro fue el desplegado por la parte acusadora por su dictamen de fs. 617/631 y vta...” (confr. registro que obra en el sistema de Gestión Judicial Lex 100; es copia textual del original).

Además, por aquella decisión se ordenó trabar embargo sobre los bienes de los imputados por la suma de \$ 17.000.000 respecto de cada uno, y se dispuso mantener la prohibición de salida del país de S. I.G. y de B. A.G. (confr. puntos dispositivos II, IV, VI y VII en registro que obra en el sistema de Gestión Judicial Lex 100).

2º) Que, cabe recordar que la causa N° CPE 101/2017, a la cual corresponde el presente legajo, se originó a raíz de la denuncia promovida por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en función de las conclusiones a las que se arribó en la investigación preliminar que le fuera solicitada por el Banco Central de la República Argentina ante “...una serie acontecimientos que vinculan...” a S. I.G., a B. A.G. y C. P.S.A. con la posible comisión del delito de lavado de activos “...y que fueran analizados por esa entidad a partir del allanamiento realizado...” a la sede de la sociedad mencionada a solicitud de aquel ente y que fuera dispuesto en el expediente N° CPE 1025/2015, caratulado “C. P.S.A. s/MEDIDAS PRECAUTORIAS”. Cumplida la medida solicitada, el expediente citado fue devuelto al Banco Central de la República Argentina; acumulado al Sumario Cambiario 6937 - Expediente N° 101.389/15 y, luego, elevado al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a los fines previstos por el art. 9 de la ley N° 19.359, formándose así la causa N° CPE 611/2017, caratulada “C. P.S.A. - AGENCIA DE CAMBIO; G., S. I.; G., B. A.SOBRE 24.144” en la que el Juzgado N° 2 de este fuero dictó sentencia absolutoria respecto de las personas mencionadas (confr. fs. 1/7 y 580/592 de la causa principal y “Legajo PROCELAC 1673” reservado).





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

Asimismo, la dirección de la investigación de la causa principal a la que pertenece este incidente inicialmente fue delegada en el Ministerio Público Fiscal, cuya solicitud de convocatoria a prestar declaración indagatoria de los imputados mencionados precedentemente, fue denegada por el señor juez “*a quo*” y, tras ser recurrida tal decisión, la misma fue revocada por esta Sala “A”, con una integración distinta de la actual (confr. CPE 101/2017/1/CA1, Reg. Int. N° 435/2018 y fs. 707/vta. de la causa principal). Aquel juzgado posteriormente citó a los imputados mencionados en los términos del art. 294 del C.P.P.N., reasumió la dirección de la investigación de la causa y ordenó la realización de un peritaje contable (confr. fs. 9, 617/631vta., 653/657, 663 y 712 de la causa principal).

Asimismo, se destaca que por el suceso descripto por el considerando anterior, el juzgado de la instancia previa resolvió declarar la falta de mérito para dictar un auto de procesamiento o de sobreseimiento respecto de B. A.G., de S. I.G. y de C. P.S.A. en los términos del art. 309 del C.P.P.N., pues estimó que resultaba necesario profundizar la investigación, encontrándose, en aquel momento pendiente de recepción información solicitada a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Unidad de Información Financiera. Por aquel pronunciamiento se dispuso también delegar la dirección de la investigación en la fiscalía interviniente en los términos del art. 196 del C.P.P.N. (confr. fs. 861/864 de la causa principal).

El decisorio mencionado fue apelado y confirmado por esta Sala “A”, con una integración parcialmente diferente de la actual (confr. confr. fs. 866/869vta. de la causa principal y CPE 101/2017/3/CA2, Reg. Interno N° 421/2019).

Luego de practicarse una serie de diligencias probatorias, el señor fiscal interviniente ante la instancia previa solicitó el dictado del auto de procesamiento respecto de los imputados; el magistrado “*a quo*” reasumió la dirección de la investigación y, tras la

producción de otras diligencias, dictó el auto referido por el considerando precedente (confr. fs. 1051/1057 de la causa principal y registros que obran en el sistema de Gestión Judicial Lex 100).

3º) Que, para resolver del modo indicado por el considerando 1º de la presente, el juzgado de la instancia anterior consideró que existirían elementos de convicción suficientes para estimar acreditado “...que S. I.G. y B. A.G. habrían efectuado los aportes irrevocables de capital aludidos ...en favor de C. P.S.A. y que, no obstante, no se encontraría justificado que el origen de los fondos utilizados para hacer aquellos aportes, haya provenido de una actividad lícita... toda vez que, si bien los ingresos declarados por aquellas dos personas físicas ante la A.F.I.P. podrían ser compatibles con la realización de aquellos aportes, lo cierto es que no está acreditada la veracidad de aquella declaración por no haberse probado su sustento en la documentación pertinente. Por otra parte, tampoco encontraría justificación...en la supuesta donación a favor de B. A.G. y S. I.G. por parte de L. G. G.[madre y cónyuge de aquéllos, respectivamente], pues no fue posible determinar un vínculo entre aquellos aportes cuestionados y los fondos exteriorizados por esta última en el marco de la ley de blanqueo N° 27.260, ya que solo se detectó un supuesto aporte de G.a favor de S. I.G., pero datado del año 2019, siendo que el movimiento de fondos que se cuestiona en este legajo, data, como hipótesis de máxima, del año 2015...”.

Además, por aquella resolución se destacó que “...ante la falta de justificación de aquel origen lícito de los fondos usados para hacer los aportes, es posible suponer una procedencia de aquéllos derivada de uno o más hechos presuntamente ilícitos...”.

Se expresó en orden a lo señalado “...que en el sumario administrativo [6]937, expediente N° 101.389, el Banco Central de la República Argentina, señalo: ‘resulta singular el hecho que la entidad desde que comenzó a funcionar a partir del año 2008, tuvo pérdidas en todos sus ejercicios económicos en forma ininterrumpida





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

*y que durante dicho lapso sus accionistas realizaron recurrentes aportes de capital por un total de aproximadamente 3 millones de pesos, lo cual representa el 206% de su exigencia actual de capital mínimo. En tanto que, **del análisis efectuado sobre el origen de los fondos destinados a la constitución de dichos aportes, merece destacarse que, para el correspondiente al accionista mayoritario Sr. S. G. realizado en el año 2014 por \$ 307.800 [ver suma resultante de los aportes efectuados por S. G. efectuados durante el año 2014 –cfr. Cuadro...de la presente-] no pudo justificarse con documentación de respaldo de capacidad económica, financiera y tributaria para la realización del mismo, por lo que la entidad no cumplía con lo dispuesto en el art. 11 de la Resolución UIF Nro. 121/2011 en relación a la política de prevención en materia de identificación y conocimiento del cliente, agravado por el hecho de tratarse del propio accionista...***

Por otra parte, conforme surge de la resolución en crisis, “...si bien del informe final efectuado por el organismo recaudador de fecha 15/10/20, se concluyó en que ‘...los ingresos declarados por el contribuyente...[se entiende B. A.G. y S. I.G.]...en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, durante los per[i]odos 2011 a 2015, resultarían superiores a los montos de aportes irrevocables...a la empresa C. P.S.A...’, lo cierto es que, por aquel...también se dijo...**que no se ha contado con documentación respaldatoria como para validar los montos consignados en las mismas’...**”.

Además, por el decisorio recurrido se expresó que la conclusión señalada por el primer párrafo de esta consideración “...se refuerza a raíz de la declaración testimonial de la Supervisora de la A.F.I.P...”, que elaboró el informe final citado, y del “...informe pericial presentado por el perito de parte, mediante el cual se expresó: ‘... he tenido a disposición la documentación aportada por la AFIP y demás piezas probatorias...incorporadas en las presentes actuaciones...Habiendo contrastado...’ aquéllas “...me encuentro en

*condiciones de afirmar que los movimientos patrimoniales e ingresos de los nombrados permiten justificar los aportes efectuados, pero no ...de poder afirmar si los servicios facturados han sido efectivamente prestados, o si los salarios denunciados se condicen con tareas realizadas en relación de dependencia, toda vez que escapa a las incumbencias de este perito, y en las actuaciones no existen evidencias contables que puedan dar cuenta de los mismos... '...'. A la vez, por aquel pronunciamiento se puntualizó que el perito contador oficial “...puso de manifiesto la falta de documentación respaldatoria aludida...” (confr. registro que obra en el sistema de Gestión Judicial Lex100; los resaltados son del original).*

4º) Que, por el recurso de apelación interpuesto y por el memorial presentado en la oportunidad establecida por el art. 454 del C.P.P.N., la defensa de S. I.G., de B. A.G. y que actúa en representación de C. P.S.A., se agravio de la resolución recurrida por cuanto por aquélla se dispuso el auto de procesamiento respecto de los nombrados y se ordenó trabar embargo sobre los bienes de las personas mencionadas a la vez que mantener la prohibición de salir del país que fuera dispuesta, oportunamente, respecto de las personas físicas mencionadas.

En sustento de aquellas presentaciones la defensa expuso que el decisorio recurrido “...descansa en un razonamiento... inapropiado...que caracteriza al delito de lavado de activos como una simple omisión de justificación de origen de fondos... olvidando...” que “... la procedencia ilícita de los fondos...debe estar m[í]nimamente circunstanciada...para establecer la ligaz[ón] que requiere la ley...”.

Además, se sostuvo que “...*el fallo insiste en contradecir [las] conclusiones...*” a las que arribó “...*la AFIP...*” que “...*ha cohonestado toda la trayectoria patrimonial de los imputados y en especial su capacidad para haber generado esos fondos...*” aunado a que “...*la Unidad de Información Financiera...remitió el informe de*







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

*inteligencia N° 188/2019...” que “...no aporta elemento de cargo alguno que pueda agravar/modificar la situación de nuestros defendidos...”.*

Se cuestionó también la resolución dictada por el juez de la instancia anterior en cuanto por aquélla se tuvo por configurada la tipicidad objetiva del lavado de activos pues, a criterio de la defensa no basta “...la falta de datos sobre el origen de fondos...para...tener por configurado un supuesto de lavado...” siendo que, además, “...el origen lícito de los fondos está perfectamente acreditado...”.

En función de lo señalado, la defensa se agravió por considerar que el decisorio recurrido en lo que atañe a la existencia de los ilícitos precedentes atribuidos se basa sólo en elementos indiciarios rebatidos “...por el aporte probatorio de la causa...” y por entender que por aquél “...se sostiene que...existiría una evasión [fiscal] precedente, pero quien debe definir eso no encontró nada que objetar...”.

En sustento de lo expuesto, por un lado, señaló que en la causa principal a la que pertenece este incidente “...en un primer momento la hipótesis delictiva...tenía fundamento en los elementos hallados el 11 de septiembre de 2015 en C. P.S.A...” pero “...[d]icha conjetura quedó descartada...” pues el 9/10/17 el Juzgado N° 2 de este fuero “...absolvió de culpa y cargo a...” aquella firma, a S. I. G.y a B. A.G. toda vez que “...no se han recabado suficientes elementos de prueba que permitan establecer fehacientemente que el dinero y documentos secuestrados en el domicilio de C. P.S.A. hubiesen sido producto de operaciones marginales de cambio...”.

Por otra parte, el recurrente señaló que “...la causa penal cambiaria en la que los nombrados fueron condenados...” en orden a la situación fáctica consistente en que “...C. P.S.A...habría utilizado su condición de autorizada para operar en cambios para instrumentar operaciones de cambio simuladas, con el fin de hacerse de divisas para realizar otros tipos de negocios distintos al autorizado...” y a la que “...la Fiscalía considera ...como el ilícito



*precedente y origen de los fondos cuestionados...” no puede ser considerada como tal pues el señor juez “a quo” en ocasión de dictar el auto de falta de mérito respecto de aquéllos -recordado por el considerando 2º de la presente- indicó que “...el monto de las operaciones de cambio cuya marginalidad se reputan en infracción objeto de aquel expediente (u\$d 27.963...), no encontrarían en principio correlación cuantitativa concluyente con los aproximadamente \$ 3.000.000 de aportes irrevocables cuestionados en esta causa...’.... El monto cuestionado en aquel expediente... era...equivalente en el año 2009 a cien mil pesos (\$ 100.000)...” (confr. registro que obra en el sistema de Gestión Judicial Lex 100, se prescinde de los resaltados del original y fs. 972vta. de la causa principal).*

Además, el recurrente descalificó el auto en crisis pues en lo atinente a “...la trazabilidad o correlación cuantitativa del dinero...[se]...evidencia una concepción contraria al principio de inocencia y a la carga de la prueba...”.

En lo que atañe a la imposibilidad de “...determinar relación alguna entre los bienes declarados por L. G. G. en su presentación al Régimen de Sinceramiento Fiscal de la ley 27.260, y la supuesta donación efectuada por aquella a los imputados...” a la que se alude por el decisorio en crisis, la parte recurrente se agravió por entender que tal conclusión “...surge de una confusión y un apartamiento de las constancias del expediente, que el Superior no puede convalidar...” pues “...[s]i ‘del análisis efectuado de las DD.JJ. de[1] Impuesto a las Ganancias de G., L., se verifica en el año 2019 una salida de fondos con la leyenda ‘APORTE A S. G.’ por \$210.000’, y si no se ha demostrado...que esa salida de fondos no fuera real o se hubiera demostrado su falsedad...no es necesaria ninguna elucubración ulterior...”.

De otra parte, aquella defensa señaló que el auto apelado “...resulta ser prematuro...” por haberse “...dictado de manera consecuente con...” el criterio del perito contador oficial expuesto por





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

el informe que luce a fs. 743/770 de la causa principal, pues indica que “...`la defensa debiera aclarar la relación entre los Aportes Irrevocables informados’...” con lo cual “...parece que...”, por la conclusión del decisorio recurrido, “...el imputado debe demostrar su conducta lícita y en defecto de ello, se presume que cometió un delito...”.

Asimismo, aquella parte, expresó que el perito contador oficial “...demuestra un actuar...subjetivo...en...violación a lo dispuesto por el art. 262 del C.P.P.N...” habiéndose apartado de los puntos de pericia establecidos.

El recurrente también expresó que advierte una contradicción en lo informado por la Administración Federal de Ingresos Públicos en orden a que a su entender por las declaraciones juradas impositivas presentadas por los imputados se concluyó que “...habrían justificado los aportes irrevocables de capital...” en tanto que, por otra parte, aquel organismo “...no logra encontrar una relación entre un blanqueo y una manifestación contable...”, entendiendo, por ende, que se debe “...dirimir la cuestión mediante el estudio encargado a un tercero idóneo e imparcial...”.

Con respecto a los embargos decretados por los puntos dispositivos II y IV y VI de la resolución apelada, la parte recurrente se agravio por entender que la suma “...fijada...excede ampliamente aquello que pudiera estimarse como reparación o costas del proceso en la presente causa...” y que “...[n]o se ha fundado suficientemente...”, por lo que en caso de proceder debería reducirse sensiblemente.

En lo que concierne al mantenimiento de la prohibición de salida el país dispuesto por el punto dispositivo VII de aquella decisión, se agravio por entender que aquella medida “...resulta excesiva, desproporcionada y falta de fundamento en las constancias de la causa...” dada la sujeción al proceso demostrada por sus asistidos.

Por último, por el recurso de apelación y por el memorial referidos, se expresó que “...los argumentos desarrollados...abarcan por igual la situación procesal de .I. G. y B. A.G., y la de C. P.S. A. ...”.

5º) Que, previo a ingresar a la cuestión de fondo, corresponde señalar que, por el art. 302 del Código Procesal Penal de la Nación se establece: “...Cuando hubieren varios imputados en la misma causa, las indagatorias se recibirán separadamente...”.

No obstante esto, se advierte que, contrariamente a lo establecido por la norma aludida, el juzgado “a quo” recibió la declaración indagatoria de S. I.G. y de C. P.S.A. S.A. en un mismo acto, de acuerdo a lo que surge del acta de fs. 846/847vta. de los autos principales, en cuanto por aquella se consignó que “...comparece ante Sr. Juez y Secretaria autorizante, una persona, a quien, se le hace saber, que se le recibirá declaración indagatoria... Acto seguido, el Sr. Juez... le informa detalladamente al compareciente que se le atribuye por si y en representación de C. P.S.A....” (es copia textual del original).

6º) Que, aparte de la inobservancia destacada por el considerando anterior, por la compulsa del expediente principal se advierte que, al momento de efectuar las citaciones a prestar declaración indagatoria de los imputados mencionados, el juzgado interviniente en la instancia previa consignó “...por encontrarse reunidos los extremos mencionados por el art. 294 del C.P.P.N., convóquese a prestar declaración indagatoria a S. I. G., a C. P.S.A. y a B. A.G. para el...10/10/18 a las 9:00, 9:30 y 10:00 hs, respectivamente...” para lo cual se fijaron tres audiencias y se dispuso librar “...cédula a la defensa...” (confr. fs. 663 de la causa principal).

Asimismo, por la lectura del acta de la declaración indagatoria aludida se observa que, respecto de la persona de existencia ideal C. P.S.A., no se ha dado cumplimiento con las





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

exigencias y las formalidades previstas por el código de formas para la celebración del acto mencionado, de modo que no puede entenderse celebrada válidamente la audiencia de que se trata con relación a la persona jurídica mencionada.

En este sentido, se observa que no se efectuó respecto de aquella el interrogatorio de identificación (acotado y acorde a la naturaleza jurídica del ente ideal) que prevé el art. 297 del C.P.P.N., toda vez que los datos proporcionados por S. I.G. al celebrarse la audiencia respectiva se refieren únicamente a su persona y ninguno de aquellos se corresponde con información relacionada a C. P.S.A.

7º) Que, por otro lado, no surge del acta referida que se haya propuesto ni proveído la defensa técnica de la persona jurídica.

8º) Que, sobre el aspecto mencionado en último término, cabe precisar que, por el acto por el cual se recibió declaración indagatoria a S. I.G., el nombrado refirió que ratificaba la designación del abogado “....P. M. P....”, sin embargo, por la compulsa de las actuaciones principales a la cuales corresponde este legajo se advierte que, en el caso, la sociedad C. P.S.A. S.A. no efectuó, por su representante legal o por cualquier persona con poder especial al efecto, presentación por la cual se designara letrado para asistirle en oportunidad alguna en la causa principal, ni antes ni después de la convocatoria ordenada respecto de aquélla en los términos del art. 294 del C.P.P.N.

En efecto, por el escrito agregado a fs. 14 de los autos principales, por el cual S. I.G. propuso dos abogados para que ejerzan su defensa técnica y otro en carácter sustituto, el nombrado se presentó “...en su carácter de presidente de C. P.S.A., por derecho propio...” e indicó que el objeto de la presentación en trato era “...designar como mis abogados a los Dres. J. M. F.....y P. M. P....”, mas no efectuó manifestación alguna al respecto como representante de la persona jurídica mencionada. Asimismo, por el acta que luce a



fs. 15 de la causa principal se dejó constancia de la comparecencia de S. I.G. ante la fiscalía de la instancia anterior y de su manifestación “...de designar para su defensa a los...” letrados mencionados “...ratificando en consecuencia dicha designación y el contenido del escrito presentado en este acto...”. Posteriormente, la fiscalía mencionada proveyó a la defensa técnica únicamente respecto del nombrado y no así de la persona jurídica (confr. fs. 16 de la causa principal).

Asimismo, es de destacar que por el acta de fs. 16vta. de la causa principal, por la cual el abogado P. M. P. aceptó el cargo de letrado defensor se consignó que lo hizo como defensor “de S. I.G.”, y por la redacción transcrita precedentemente no se permite considerar, teniendo en cuenta además la designación dispuesta por la fiscalía de la instancia anterior a la que se hizo referencia por el párrafo precedente, que aquel letrado haya aceptado el cargo como defensor de la persona jurídica.

9º) Que, por las circunstancias puestas de resalto por los considerandos anteriores, se advierte que en el caso “*sub examine*” no se ha cumplido con la exigencia legal de recibir la declaración indagatoria de la persona de existencia ideal C. P.S.A., y proveer a su defensa técnica, previo al dictado de un auto de procesamiento a su respecto, lo que implicó privar a aquella sociedad de la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa material, lo cual tiene entidad para afectar el derecho constitucional de la defensa en juicio que asiste a la misma. Por lo tanto, la decisión de mérito decretada en torno a la persona jurídica mencionada, en cuanto se relaciona con el suceso expresado por el considerando 1º de la presente, se encuentra viciada de nulidad.

En consecuencia, corresponde declarar la nulidad del auto de procesamiento de C. P.S.A. dispuesto por el punto dispositivo V de la resolución recurrida, respecto del hecho aludido por el párrafo anterior, y del punto dispositivo VI de aquella, en cuanto se dispuso





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

trabar un embargo sobre los bienes de aquella persona de existencia ideal, así como de todos los actos consecutivos que dependan de las decisiones aludidas (confr. arts. 166, 167 -inc. 3º, 168 -párrafo segundo- y 307 del C.P.P.N., así como el art. 18 de la Constitución Nacional) y encomendar al juez “*a quo*” para que adopte las medidas necesarias a los fines de adecuar lo dispuesto respecto del ente ideal a los lineamientos establecidos precedentemente, asegurando el derecho de defensa de la persona de existencia ideal de que se trata.

10º) Que, por el examen de los agravios deducidos por la parte recurrente se advierte que algunos de los mismos guardan estrecha relación entre sí, lo cual conduce, para una mayor claridad expositiva de la presente y a fin de evitar reiteraciones innecesarias, a que aquéllos sean tratados de manera unificada.

11º) Que, sentado lo anterior y en lo que concierne a los cuestionamientos de la resolución dictada por el señor juez “*a quo*” en cuanto a que por aquélla se habría soslayado que “*...la procedencia de los fondos...debe estar m[i]nimamente circunstanciada...para establecer la ligaz[ón] que requiere la ley...*”; a que en el caso no se encontraría acreditado el origen ilícito de los fondos que se inyectaron en la firma C. P.S.A. mediante los aportes cuestionados y a que, a entender del recurrente, se advertirían contradicciones en lo informado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, corresponde indicar que los cuestionamientos mencionados parten de un análisis aislado en orden a la entidad convictiva de los elementos de prueba incorporados actualmente a la causa.

En efecto, como ha establecido este Tribunal en casos anteriores, “*...aquel análisis parcial no puede tener una recepción favorable, pues la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada elemento de prueba depende de la valoración conjunta que se efectúa de aquellos teniendo en cuenta la diversidad, la*

*correlación y la concordancia de los mismos, pero no de un tratamiento particular y aislado pues, por su misma naturaleza, cada uno de los indicios no puede llegar a fundar aisladamente ningún juicio convictivo, el cual deriva de la pluralidad y de la concordancia de estos (confr. Fallos 300:928)...”* (confr., entre muchos otros, Regs. Nos. 43/11, 490/11 y 718/12, como también CPE 387/2010/2/CA1, 24/10/14, Reg. Interno N° 464/14; CPE 1538/2010/4/CA1, 10/03/15, Reg. Interno N° 58/15; CPE 12005804/2009/2/CA1, 17/07/15, Reg. Interno N° 310/15, CPE 1274/2013/6/3/CA3, 18/09/15, Reg. Interno N° 419/15 y CPE 354/2014/2/CA1, 01/07/16, Reg. Interno N° 312/16, de la Sala “B”, CPE 1561/2018/67/105/CA55, res. del 08/10/19, Reg. Interno N° 684/19 y CPE 1913/2019/5/CA1, res. del 18/02/20, Reg. Interno N° 46/20 de esta Sala “A” de este Tribunal).

En este sentido, *“...la totalidad de los elementos probatorios arrimados al expediente debe ser objeto de una valoración articulada, contextual y conjunta dentro del plexo probatorio, el cual, evaluado en un acto único y con ajuste a la sana crítica racional, posibilita la obtención de una acabada constatación de los hechos investigados. El mero análisis parcializado de los elementos de prueba incorporados al proceso, impide la comprensión global del hecho de que se trata”* (confr., entre otros, Regs. Nos. 879/03, 785/10, 360/13 y CPE 278/2013/4/CA2, res. del 31/10/2016, Reg. Interno N° 624/16 y CPE 1950/2014/116/CA8, res. del 17/2/2023, Reg. Interno N° 35/2023 de la Sala “B”, así como también CPE 1561/2018/67/105/CA55, res. del 08/10/19, Reg. Interno N° 684/19 y CPE 1913/2019/5/CA1, res. del 18/02/20, Reg. Interno N° 46/20 de la Sala “A”, ambas de esta Cámara).

**12º)** Que, con relación al agravio vinculado a que por el decisorio en crisis, según la parte recurrente, *“...se sostiene que... existiría una evasión [fiscal] precedente, pero quien debe definir eso no encontró nada que objetar...”*, corresponde señalar que por aquél nada se expresó en orden a la existencia de un posible ilícito penal







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

tributario calificable como hecho ilícito precedente en los términos exigidos por el tipo penal descripto por el art. 303, inc. 1º, del C.P. sino que, en orden a tal aspecto de su faz objetiva, el señor juez “*a quo*”, específicamente, señaló por el considerando 1º de aquél que “*...se habría constatado de manera indiciaria la posible comisión de hechos ilícitos precedentes, relacionados con operaciones de cambio de divisas marginales efectuadas por la casa de cambio (en infracción al régimen penal cambiario)...*”.

En función de lo expresado, el referido agravio no puede tener recepción favorable.

13º) Que, en el caso, se encontraría acreditado con el alcance requerido para esta etapa del proceso, que:

a) La sociedad comercial C. P.S.A. registró desde su constitución en el año 2008 y -al menos- hasta el año 2014 inclusive, pérdidas en todos sus ejercicios económicos en forma ininterrumpida. En ese sentido puede confrontarse la investigación preliminar desarrollada en orden a los imputados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos como también los informes periciales contables confeccionados conforme lo ordenado en la causa principal (confr. “Legajo PROCELAC 1673” reservado y fs. 743/771, 773/788vta., 920/935vta., 1009/1016 y 1019/1044 de la causa principal).

b) En el período comprendido entre el 28/7/2011 y el 30/12/2014 S. I.G. y de B. A.G. efectuaron los aportes de capital mencionados en C. P.S.A. -cuya realización no fue controvertida por el recurrente-, de la cual ambos eran socios fundadores, a la vez que presidente y vicepresidente, respectivamente.

c) Los aportes de capital señalados se efectuaron mediante depósitos de dinero en efectivo en la cuenta bancaria de titularidad de la sociedad mencionada abierta en el Banco I. en las fechas detalladas por el cuadro consignado por el considerando 1º de la presente, lo que puede cotejarse con los resúmenes de operaciones

aportados por la defensa de S. I.G. que obran a fs. 312/323 del expediente principal.

d) La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que S. I.G. y B. A.G. en orden a los ejercicios fiscales 2011 a 2015 -ambos inclusive- han declarado “...*ingresos gravados y exentos que superan el monto de aportes irrevocables realizados a...C. P.S.A., no obstante ello cabe aclarar que es información que surge de datos de ddjj presentadas por el contribuyente y que no se ha contado con la documentación respaldatoria como para validar los montos consignados en las mismas...*” (confr. fs. 64/65 y 55/56 de los informes denominados “Adjunto correo...AFIP parte 2...” y “Adjunto correo...AFIP parte 3...”, respectivamente, incorporados el 15/10/2020 en el sistema de Gestión Judicial Lex 100).

e) Los informes periciales elaborados por los peritos contadores oficial y de parte, resultan coincidentes en cuanto a que si bien de las declaraciones juradas impositivas presentadas por S. I.G. y por B. A.G. se puede justificar su capacidad respectiva para efectuar los aportes referidos, a partir de aquéllas no es posible verificar la trazabilidad de los fondos obtenidos por los nombrados y exteriorizados en las mismas y que fueron afectados a los aportes irrevocables citados pues se carece del respaldo documental que permita constatar tal extremo (confr. fs. 1009/1016 y 1019/1044 de la causa principal).

f) La información contenida en el cuadro aportado por la defensa de los nombrados por el acápite anterior y que luce a fs. 292 de la causa principal, no permite tener por acreditada la capacidad económica de aquéllos para efectuar los aportes aludidos toda vez que, tal como lo expuso en su declaración testifical S. B. V., supervisora de la División Fiscalización N° 4 de la Dirección Regional Microcentro del órgano recaudador citado, aquél “...*[ú]nicamente permite acreditar parcialmente su capacidad económica por el ejercicio 2015 en razón de haber tenido a la vista la documentación parcial...*” pues de los conceptos que allí figuran “...





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

*sólo se aportó, con relación al ejercicio 2015, y respecto de B. G... recibos de haberes en concepto de sueldo de Directores en la firma L. C. S.A....” y, al respecto, aquel organismo concluyó en orden al nombrado que “...[l]as remuneraciones correspondientes...resultan bajas en extremo...” (confr. fs. 120 del cuerpo “Alcance Nro: 10750-1108-2019/1, reservado; fs. 54 del informe denominado “Adjunto correo ...AFIP parte 3...” incorporado el 15/10/2020 en el sistema de Gestión Judicial Lex100 y fs. 910/912vta. de la causa principal).*

g) Se ha establecido, por un lado, conforme informe confeccionado por la Administración Federal de Ingresos Públicos que “...de las consultas de los sistemas informáticos no es posible determinar relación alguna entre los bienes declarados por L. G. G.en su presentación al Régimen de Sinceramiento Fiscal de la ley 27.260, y la supuesta donación efectuada por aquella a los imputados...” y, por otro, que “...del análisis efectuado de las DD.JJ. de Impuesto a las Ganancias de G. L., se verifica en el año 2019 una salida con la leyenda ‘APORTE A S. G.’ por \$ 210.000...”; lo que permite entender en concordancia con el señor juez “a quo”, que a partir de aquellos actos de la nombrada, no se puede justificar el origen del dinero utilizado por los imputados para efectuar los aportes señalados (confr. informe denominado “Archivo adjunto ...Oficio OI 1.921.497 G...” incorporado el 4/6/2021 en el sistema de Gestión Judicial Lex 100).

h) La firma C. P.S.A. fue suspendida para operar en cambios mediante la Comunicación “C” 53.316 del Banco Central de la República Argentina de fecha 4/5/2009 en atención a “...las características singulares surgidas del movimiento operativo cambiario informado...” en virtud de las tareas de fiscalización que se le practicaron (confr. fs. 68 y 74 del “CUERPO I...” de la Unidad de Información Financiera, reservado). Al respecto cabe notar que aquella firma fue inspeccionada por el ente rector entre los días 4/5/09 y 15/5/09 y, en consecuencia, “...se elaboró...el informe N° 381/188/15 (expediente 100.125/10) por el cual se expresó que: ‘Al

*momento de efectuar la inspección en la casa de cambio investigada, se verificó una inconsistencia entre los volúmenes operados por montos de entre \$20.000 y \$30.000, por parte de su clientela quienes en su mayoría se domiciliaban en barrios carenciados del conurbano bonaerense...”. Por el informe señalado también se indicó que “...C. P.S.A...habría utilizado su condición de autorizada para operar en cambios para instrumentar operaciones de cambio simuladas, con el fin de hacerse de divisas para realizar otros tipos de negocios distintos del autorizado...” (confr. fs. 972/990vta., en especial, fs. 972/vta. de la causa principal).*

i) Los imputados en estos autos han sido condenados en el marco de la causa N° CPE 245/2018 -del registro del Juzgado N° 3 de este fuero y formada en virtud de lo actuado en el Expediente N° 100.125/10 del Banco Central de la República Argentina- a la pena de multa por la suma equivalente a siete millones de dólares estadounidenses para cada uno de ellos en orden a los hechos por los que se les instruyó sumario y que fueron calificados en las previsiones del art. 1°, inc. “c” de la ley 19.359 -vinculados al período infraccional comprendido entre el 24/2/2009 y el 26/2/2009- y, si bien el monto cambiario involucrado en aquélla (U\$S 27.963) no presenta un correlato exacto con aquel vinculado a la suma a la que ascienden los aportes cuestionados en autos, no deja de ser –más allá de haber representado una suma significativa para aquel momento y contrariamente a lo pretendido por el recurrente- un indicio preciso de una actividad ilícita de la cual podrían haber derivado fondos que, relacionado con los demás indicios detallados precedentemente, contribuye a conformar el cuadro de convicción exigido por esta etapa del proceso (confr. fs. 973 de la causa principal y CPE 245/2018, res. del 13/11/2020, Reg. Interno N° 516/2020 de la Sala “B” de esta Cámara).

Por lo tanto, resulta en principio razonable la estimación efectuada por el juzgado de la instancia anterior en cuanto a la presunta inexistencia de un origen lícito del dinero que fue inyectado





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

en C. P.S.A. bajo la figura de aportes irrevocables de capital en el período investigado.

14º) Que, en ese contexto, no pueden tener una recepción favorable los agravios expresados por la defensa en cuanto, a que habría sido acreditado el origen lícito del dinero utilizado para efectuar los aportes de capital mencionados toda vez que, en realidad, éstos no se corresponderían con ingresos provenientes efectivamente de las actividades declaradas por los imputados sino de ilícitos penales que habrían sido cometidos en el marco de aquéllas.

Lo afirmado precedentemente se refuerza si se tiene en cuenta que, conforme se expresó por la consideración anterior, se encuentra acreditado que se carece de soporte documental que permita estimar que la información exteriorizada por los imputados en sus declaraciones juradas impositivas en orden a sus ingresos y que los datos contenidos en el cuadro aportado por su defensa y que obra a fs. 120 de la causa principal, guarde relación con actos lícitos.

Por lo demás, no debe soslayarse que aquellos aportes no se efectuaron vía transacciones bancarias sino mediante depósitos sucesivos de dinero en efectivo en la cuenta bancaria de C. P.S.A., circunstancia que corresponde, cuanto menos, sea valorada, junto con los restantes elementos de juicio incorporados a la causa hasta el momento y reseñados “*ut supra*”, como un indicio del origen ilícito de aquellos fondos.

En efecto, la utilización de dinero en efectivo por parte de los imputados para perfeccionar los aportes irrevocables mencionados permite inferir, con el alcance exigido por esta etapa del proceso, que se trataría de dinero que no se encontraba incorporado al sistema bancario hasta aquel momento lo que contribuye a acreditar el presunto origen ilícito del mismo.

Por lo demás, la referencia de la defensa a la sentencia absolutoria dictada en el marco de la causa N° CPE 611/2017, no obsta a las conclusiones a las que se arribó por el pronunciamiento



bajo análisis, toda vez que por aquélla -cuya copia fue acompañada por la parte mencionada-, se consignó específicamente que las conclusiones allí expresadas lo eran en el marco de aquel legajo y “... sin perjuicio de las consideraciones que al respecto, pudieren efectuarse en el marco de otras investigaciones, en las cuales el objeto procesal resulta distinto al que se fijara en estos autos, el cual ha quedado circunscripto a la supuesta operatoria marginal en materia de operaciones de cambio...” . Asimismo, cabe mencionar que la falta de vinculación -incluso temporal- de aquel legajo con la causa a la que pertenece este incidente se advierte de la sentencia recordada pues, por aquélla se expresó que “...la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras llevó a cabo verificaciones los días 28/04/15 y 31/08/15, en el local de...C. P.S.A...realizándose observaciones...” que motivaron su allanamiento el 11/9/15, estableciéndose a partir del hallazgo producido en razón de aquel acto (de dinero, divisas y papeles varios) que el período infraccional se comprendía entre el 28/4/15 y el 11/9/15 (confr. fs. 580/594 de la causa principal y consideración 1º de la presente).

Por lo tanto, la apreciación efectuada por el juzgado de la instancia anterior en torno del origen ilícito estimable de aquel dinero, que habría sido depositado en la cuenta bancaria de C. P.S.A. asignándosele el carácter de aportes irrevocables de capital, se presenta en este momento del proceso como razonable.

15º) Que, por otra parte, en relación con la existencia de la maniobra de lavado de activos descripta por el auto apelado, debe tenerse presente que los sucesivos actos de aportes de capital en C. P.S.A. mediante depósitos bancarios de dinero en efectivo cumplidos por quienes resultaban ser socios a la vez que autoridades de aquélla y que luego fueron aprobados en el marco de las asambleas y registrados mediante los trámites respectivos ante la Inspección General de Justicia, constituyen etapas que se corresponden con las diversas operaciones necesarias para integrar dinero en el mercado financiero, en





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

los términos descriptos por el art. 303 del C.P. En ese sentido, la adquisición de apariencia de origen lícito del dinero que carece de esa calidad, es el resultado de un proceso que puede ser llevado a cabo por etapas, mediante la realización de diferentes acciones u operaciones en principio concatenadas, tendientes a aquel fin y acumulando los efectos de todas aquéllas (confr. cuerpo “...*Inspección General de Justicia TRAMITE...1797655...C. P.SA...*”, reservado).

Sobre esta cuestión se ha expresado la doctrina sosteniendo que: “...[s]e denomina ‘lavado de dinero’ al proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Tres etapas diferentes han sido reconocidas en el proceso de ‘lavado’: una inicial o de ‘colocación’, en la cual la organización criminal dispone del producto de su actividad y obtiene su ingreso en el sistema financiero. Luego tiene lugar la etapa de ‘estratificación’, durante la cual se llevan a cabo el mayor número posible de transacciones, con la finalidad de impedir que pueda reconocerse, luego de todo el proceso, el arbitrio utilizado para la ‘colocación’. Finalmente llega el momento de la ‘integración’: cuando puede disponerse de los fondos dentro del marco económico legítimo porque provienen -en lo inmediato- de actividades financieras que, en sí mismas, son lícitas.” (D’ALBORA, Francisco J., *Lavado de dinero*, Ed. Ad-Hoc, 2011, Buenos Aires, págs. 14 y 15).

En el caso, la exteriorización de determinados ingresos en declaraciones juradas impositivas cuya real existencia no ha podido justificarse en soportes documentales y los depósitos sucesivos de dinero en efectivo en la cuenta bancaria de C. P.S.A. que permitieron inyectar fondos en la cuenta bancaria de aquélla bajo la figura de aportes irrevocables de capital, habrían conllevado contribuciones diversas a la realización de los hechos por parte de los imputados mediante los que se procuró dar apariencia de licitud a fondos de origen ilícito.



16º) Que, en función de lo establecido por las consideraciones que anteceden se advierte que las pruebas incorporadas actualmente al expediente principal permiten, al menos a esta altura del proceso, descartar los agravios de la defensa por los cuales se intentó otorgar un viso de licitud a los fondos depositados en la cuenta bancaria de C. P.S.A. y que fueran aplicados a la constitución de aportes irrevocables de capital configurándose en principio la operación de lavado de activos que es objeto de la investigación en la causa principal.

17º) Que, por lo demás, en orden a la posibilidad de encuadrar jurídicamente los hechos analizados en la figura penal establecida por el art. 303 del Código Penal, corresponde recordar que no es necesario que en la presente causa, que actualmente tiene por objeto la investigación y la acreditación de supuestas responsabilidades penales por presuntos hechos de lavado de activos de origen delictivo, se investigue el ilícito penal previo del cual procedería aquel dinero, cuyo origen espurio debe estimarse probado con el alcance requerido para este momento del proceso, por las circunstancias señaladas por los considerandos anteriores (confr. en sentido similar, CPE 43/1019/3/CA1, res. del 12/5/2020, Reg. Interno N° 177/2020 y CPE 411/2015/32/CA2, res. del 12/8/2022, Reg. Interno N° 348/22, de la Sala “B”).

18º) Que, por otra parte y, contrariamente a lo manifestado por el recurrente en cuanto a que, a su entender, por el decisorio en crisis se indicaría que “...*el imputado debe demostrar su conducta lícita y en defecto de ello, se presume que cometió un delito...*”, de lo que se infiere que la defensa estima que en el caso se verificaría una inversión de la carga de la prueba, se advierte que en el caso no se materializa aquella circunstancia.

En efecto, “...*el presente caso no se trata de un supuesto en el cual, ante la ausencia de elementos probatorios que avalen la hipótesis delictiva, aquélla se dio por comprobada por considerar*







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

*que el imputado no aportó prueba suficiente para refutarla. Por el contrario, en el expediente principal se expresaron los indicios convergentes que sustentan los razonamientos por los cuales se convalidó (con el nivel de certeza requerido para esta etapa del proceso penal) la imputación efectuada. La falta de argumentos de la defensa (basados en elementos probatorios concretos) para contrarrestar aquellos razonamientos mal puede llevar a la conclusión que se ha invertido la carga probatoria...” (confr. CPE 1432/2007/4/CA2, res. del 30/12/15, Reg. Interno N° 641/15 y 1652/2014/31/9/CA67, res. del 8/12/2017, Reg. Interno N° 937/17, de la Sala “B”).*

**19º)** Que, el análisis de los elementos probatorios incorporados a la investigación, ponderados en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana crítica, permiten en este estado del proceso, con el grado de certeza que se exige para el dictado de un pronunciamiento como el recurrido, descartar el argumento introducido por la defensa en cuanto a que aquél resulta prematuro; por lo que el agravio introducido por aquélla en tal sentido no puede tener recepción favorable.

**20º)** Que, por lo demás, sin perjuicio de la necesidad eventual de producir alguna prueba, y por los resultados que aquella pudiera traer aparejada en el futuro, no pueden soslayarse las conclusiones expresadas por los considerandos anteriores -que se basan en las constancias que actualmente se encuentran incorporadas a la encuesta-, ni se impide adoptar el temperamento que se establece por el art. 306 del ordenamiento adjetivo, pues por aquel ordenamiento se prevé el carácter provisorio, revocable y reformable del auto de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.), precisamente para que el juez pueda ponderar aquellas circunstancias futuras en el supuesto en que se produjesen (confr. Regs. N° 1036/05, 132/08, 7/11, 379/11, 703/11, 762/11, 161/12, 237/15 y 167/16, entre muchos otros, de la Sala “B”).



En este sentido, este Tribunal ha establecido: “...para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita corroborar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable de los indagados por aquel hecho...” (confr. Regs. Nos. 606/10 y 237/15, entre otros, de la Sala “B”).

21º) Que, por lo expresado por las consideraciones que anteceden, corresponde concluir que el auto de procesamiento, dictado respecto de S. I.G. y de B. A.G., resulta ajustado a derecho y a las constancias incorporadas actualmente al expediente.

22º) Que, por otra parte el recurrente sostuvo que la actuación del perito contador oficial que intervino en la causa principal habría sido subjetiva y se habría desarrollado “...en... violación a lo dispuesto por el art. 262 del C.P.P.N...”, cabe señalar que el planteo referido no fue objeto de tratamiento ni de consideración alguna mediante la decisión recurrida.

En orden a lo referido se advierte que aquella parte introdujo por ante la instancia anterior y por la presentación identificada bajo la leyenda “...IMPUGNA SOLICITA...” una cuestión de similar tenor respecto de la cual, el señor fiscal de la instancia anterior dispuso “...de lo planteado por la defensa, por el momento téngase presente para su oportunidad...” sin que obren en este incidente ni en la causa principal constancia de que se haya arbitrado al respecto cuanto pudiera corresponder (confr. fs. 815/vta., 993/996 y 1005, punto III, de la causa principal).

23º) Que, con relación a los embargos que se dispusieron por los puntos II y IV de la resolución apelada, respecto S. I.G. y de B. A.G., corresponde expresar que por el considerando 23º de la resolución recurrida el juzgado “a quo” expresó los motivos en función de los cuales estableció los montos de los embargos que dispuso, y la





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

parte recurrente no logró demostrar la improcedencia concreta de las medidas cautelares dispuestas ni el desajuste de aquellas de acuerdo con las eventuales y diversas obligaciones previstas por el artículo 518 del C.P.P.N.

Por lo tanto, corresponde confirmar también la resolución recurrida en relación con la orden de trabar embargo sobre los bienes de S. I.G. y de B. A.G..

24º) Que, por último, con respecto a los recursos de apelación interpuestos por la defensa de S. I.G. y de B. A.G. contra el punto dispositivo VII de la resolución recurrida por el cual el juzgado “a quo” dispuso: “...**VII. MANTENER** la prohibición de salida de Argentina, respecto de S. I.G. y B. A.G., dispuesta por punto 2º del decreto de fecha 13/04/18 (firmado el 16/04/18 en el Sistema LEX 100)...” corresponde tener en cuenta que, conforme lo expresado por este Tribunal en numerosas oportunidades, como regla general, los pronunciamientos por cuales, de oficio o a instancia de alguna de las partes, únicamente se decide mantener lo resuelto con anterioridad en la causa con respecto a alguna cuestión, no constituyen alguna de las declaraciones jurisdiccionales previstas por el art. 449 del C.P.P.N., ni causan un gravamen irreparable (confr. Regs. Nos. 444/99, 899/99, 508/04, 326/09, 266/14; CPE 633/2008/4/CA3, res. del 20/3/2015, Reg. Interno N° 84/15; CPE 1181/2014/7/CA2, res. del 8/11/2017, Reg. Interno N° 761/17; y CPE 269/2018/8/CA3, res. del 29/06/2018, Reg. Interno N° 488/18, entre otros, de la Sala “B”).

En efecto, pronunciamientos como el dictado por el juzgado “a quo” por el punto VII de la resolución recurrida, los cuales resultan ser meramente declarativos e innecesarios, no pueden ser el punto de partida de la impugnación de lo decidido anteriormente en el proceso con relación a la limitación ambulatoria de que se trata, por tratarse de medidas que ya se encontraban en conocimiento de la parte recurrente, sin que las hubiera objetado en tiempo oportuno (confr. fs. 649 de los autos principales).

Por lo expresado, los recursos de apelación deducidos por las defensas de S. I.G. y de B. A.G. contra el punto dispositivo mencionado, no resulta formalmente admisible y, por lo tanto, corresponde declarar mal concedido el mismo respecto del punto VII de la resolución apelada.

Por ello, **SE RESUELVE:**

**I. DECLARAR LA NULIDAD** del auto de procesamiento de C. P.S.A. dispuesto por el punto dispositivo V de la resolución recurrida, y del punto dispositivo VI de aquella, en cuanto se dispuso trabar un embargo sobre los bienes de la persona de existencia ideal, así como de todos los actos del proceso que dependan de las decisiones aludidas.

**II. CONFIRMAR** los puntos I, II, III y IV de la resolución recurrida en cuanto por aquéllos se dispuso el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de S. I.G. y de B. A.G. y se dispuso trabar un embargo sobre los bienes de aquéllos hasta cubrir la suma de \$17.000.000, respectivamente. **CON COSTAS** (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

**III. DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO** el recurso de apelación interpuesto por la defensa de S. I.G., de B. A.G. contra el punto VII de la resolución apelada, por los cuales se resolvió mantener la prohibición de salida de Argentina de los nombrados, dispuesta por el punto 2° del decreto de fecha 13/04/18. **SIN COSTAS** (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

**IV. ENCOMENDAR** al juzgado de la instancia previa en los términos de lo expresado por el considerando 9°.

Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A  
CPE 101/2017/7/CA3

Se deja constancia de que la Dra. Carolina L. I. ROBI-  
GLIO no firma la presente por haberse aceptado la inhibición formu-  
lada por la señora juez de Cámara mencionada para intervenir en au-  
tos (confr. Reg. Interno N° 236/2022, Art. 109 del Reglamento para la  
Justicia Nacional).

JUAN CARLOS BONZON  
JUEZ DE CAMARA

ROBERTO ENRIQUE HORNOS  
JUEZ DE CAMARA

ANTE MÍ

NANCY BEATRIZ GARÇON  
SECRETARIA DE CAMARA

